



Los derechos hoy

**Arturo
Zaldívar**

Justicia y seguridad para lograr la paz

Nuestro país enfrenta desde hace muchos años una crisis de violencia como resultado de la llamada “Guerra contra el narcotráfico”; la estrategia irreflexiva que emprendió Felipe Calderón durante su administración, y que a la fecha nos ha costado cientos de miles de vidas y un dolor colectivo incalculable.

En el centro de esa política punitivista estaba la idea de que la violencia se combate con más violencia, y que la única forma de lidiar con la delincuencia es mediante una guerra abierta, permanente y total desde el Estado, sin importar el costo que ello implique en términos financieros, humanos y de justicia.

Lejos de abatir la impunidad y debilitar al crimen organizado, esta estrategia represiva detonó una espiral de violencia sin precedente: homicidios, secuestros, extorsiones, desapariciones forzadas y otras violaciones de derechos humanos, con repercusiones desoladoras para la vida de millones de mexicanos, la gobernabilidad y la paz.



Lo cierto es que la delincuencia y los factores que ocasionan la violencia, en buena medida, tienen su origen en la desigualdad. La pobreza, la exclusión, la marginación y la falta de acceso a derechos proporcionan un contexto propicio para ello. Enfrentados a la disyuntiva de morir o delinquir, muchos jóvenes son arrastrados hacia organizaciones criminales que destrozan sus vidas y las de sus familias con total impunidad.

Por ello, la inseguridad no es un problema que se pueda resolver con una guerra absurda, ni con prisiones o armamento, como lo propone la derecha. Defender este enfoque represivo a pesar de su fracaso en el pasado no solo es populismo penal, sino una treta hipócrita y profundamente inmoral.

Si queremos atender la violencia de raíz, lo que requerimos es un proyecto de construcción de paz.

Un proyecto que atienda a las causas, con programas sociales para romper los ciclos de violencia que propician la criminalidad y ofrecer alternativas reales de educación, empleo y pertenencia a los jóvenes en su comunidad, a fin de que realicen sus anhelos en libertad.



Requerimos un proyecto que consolide a los cuerpos de seguridad pública, particularmente a la Guardia Nacional, para combatir a la delincuencia en todo el territorio nacional con eficacia, profesionalismo y respeto por los derechos humanos. Un proyecto que fortalezca las capacidades de investigación de nuestras policías, para que los delitos se persigan con inteligencia, y que garantice que las instituciones de seguridad se coordinen con las fiscalías en los tres órdenes de gobierno para obtener mejores resultados sin descuidar el debido proceso.

Nuestro país demanda un proyecto que reconozca que sin justicia, no puede haber seguridad. Que en la construcción de la paz, todos los actores y poderes del Estado tienen una responsabilidad fundamental, y los poderes judiciales no son la excepción.

No basta con reformar al Poder Judicial Federal —lo cual resulta indispensable para asegurar que éste contribuya a la construcción de paz con total independencia de intereses económicos, políticos o partidistas—, sino de impulsar una reforma profunda e integral a todo el sistema de justicia. Se trata de garantizar que las fiscalías, los poderes judiciales y las defensorías públicas actúen de



forma coordinada en los tres niveles de gobierno para abatir la impunidad y proteger los derechos de las personas más vulnerables de nuestra sociedad.

Solo así, con una mejor justicia, podremos atender de raíz el fenómeno de la inseguridad y recuperar la paz para millones de mexicanos. Ese es el proyecto que necesitamos. Ese es el proyecto transformador que representa Claudia Sheinbaum: el proyecto que ya dio resultados en la Ciudad de México; además de ser la única candidata con experiencia y logros medibles en el combate a la impunidad. Esta es la única ruta posible para construir un país seguro y con justicia, en el que todas las personas vivan sin miedo y con dignidad.